

PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. (...) La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”, así comienza el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York en 2003.

En 2017 la Comisión Europea emitió el informe “Updated Study on Corruption in the Healthcare Sector” en el que se hace referencia a las medidas de prevención de la corrupción como mecanismo de control y, en concreto, expresa que “las políticas preventivas cubren una amplia gama de aspectos, desde las normas éticas claras, las medidas de sensibilización, la construcción de una cultura de la integridad en las distintas organizaciones y la firmeza de los dirigentes en materia de integridad hasta la eficacia de los mecanismos de control interno, la transparencia, el fácil acceso a la información de interés público, sistemas eficaces para la evaluación del rendimiento de las instituciones públicas, etc.

Existe una brecha considerable entre los Estados miembros en materia de prevención de la corrupción. En algunos, la aplicación de las políticas de prevención ha estado fragmentada y no ha dado resultados satisfactorios. En otros, una prevención eficaz ha contribuido a una sólida reputación de «países limpios». Aunque la corrupción no se considera un problema importante en estos últimos países, se están llevando a cabo programas activos y dinámicos de prevención e integridad, considerados prioritarios por la mayoría de las autoridades centrales y locales. En otros Estados miembros, la corrupción se ha considerado como un problema menor durante un largo período de tiempo, por lo que no se adopta una actitud activa en la promoción de acciones preventivas”. España, sin duda, se

encuentra entre estos últimos y no se adoptan medidas preventivas de lucha contra la corrupción.

En 2017 la OCDE emitió una Recomendación sobre integridad pública, insistiendo en la necesidad de crear un modelo de integridad institucional que sirva como prevención para que no aparezca ni prolifere no solo la corrupción sino tampoco las conductas poco éticas.

En el seno de la OMS existe la Oficina de Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética (CRE) que emitió, también en 2017, un informe sobre fomento de códigos de conducta y valores, cumplimiento de controles internos, detección sistemática de riesgos y rendición de cuentas.

Todos los textos mencionados ponen de manifiesto que en los estados de nuestro entorno la adopción de medidas y la implantación de políticas preventivas de corrupción son una constante a la que es necesario que España se incorpore sin dilación. Por este motivo, el objeto de la presente Ley es la creación de una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, que adoptará la forma de autoridad administrativa independiente.

La función de dicha agencia será la de prevención de la corrupción en el Sistema Nacional de Salud, y para la consecución de dicho objetivo ha de reunir también funciones de coordinación y supervisión en las áreas de riesgo y proponer medidas e instrumentos jurídicos de carácter preventivo y, en su caso, de carácter correctivo ante la vulneración de códigos de buenas prácticas. En este sentido, es preciso recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2019 (recurso 4442/2018) afirma que los principios de buena administración no constituyen una fórmula vacía de contenido, sino que se imponen a las Administraciones públicas como principios de actuación exigibles por la ciudadanía.

En caso de que en el ejercicio de sus funciones la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud aprecie la concurrencia de indicios de actuaciones constitutivas de delito dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.

II

Esta Ley pretende reforzar el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución española, derecho que tiene carácter instrumental del derecho fundamental a la vida e integridad física tutelados en el artículo 15 de la Constitución española. Nuestro Estado de Bienestar consagra el derecho a la protección de la salud como un pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho; esta especial relevancia y significación de la protección de la salud exige una especial exigencia de comportamientos de ejemplaridad por parte de todos los decisores vinculados a las prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos. El citado artículo 43 de la Constitución española ha

sido concretado como un verdadero derecho de ciudadanía sanitaria en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización; esta norma jurídica, pilar esencial del Sistema Nacional de Salud, viene a hacer reconocibles a las prestaciones sanitarias que finalmente serán canalizadas en el conjunto de las unidades y servicios del conjunto de las Administraciones públicas sanitarias.

Estas prestaciones sanitarias se canalizan a través de entornos organizativos e institucionales, y condicionadas por decisiones políticas y directivas. Este ecosistema en la toma de decisiones sobre las prestaciones sanitarias exige por parte de los directivos y gestores un especial compromiso con la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas y un pleno y total sometimiento a la responsabilidad jurídica y ciudadana. El Sistema Nacional de Salud debe ser territorio ajeno a actos de corrupción sanitaria, y que pueden menoscabar el pleno ejercicio de las prestaciones sanitarias por los pacientes y los usuarios. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud se erige en el necesario contrapeso para un efectivo control sobre los riesgos de las prácticas de corrupción sanitaria.

Los principios de equidad y universalidad que caracterizan nuestro modelo sanitario público pueden verse socavados por la existencia de prácticas corruptas en los directivos sanitarios, responsables políticos, profesionales sanitarios y en la propia estructura orgánica.

III

Esta ley articula su contenido en cuatro capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, y que pretenden otorgar un estatuto jurídico de relevancia en el Sistema Nacional de Salud a la Agencia. Ésta adquiere perfiles de autoridad independiente sin vinculación funcional u orgánica; la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad la instauración de un modelo de integridad institucional en la sanidad pública para prevenir la corrupción. En coherencia con lo anterior el ámbito subjetivo de la presente ley tiene carácter omnicomprensivo y universal para que su labor de inspección, tutela y control sea plena, total y completa.

La principal función de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud es garantizar la dimensión constitucional del derecho a la protección

a la salud de las españolas y españoles, y así esta ley establece unas “funciones de alta autoridad”, y que se concretan en funciones de prevención de la corrupción sanitaria, funciones en materia de investigación de conductas de corrupción sanitaria y funciones de difusión de información y formación en materia de integridad.

Las “funciones de alta autoridad” se ejercerán con pleno sometimiento a la legalidad, respeto al principio de autonomía en la gestión de los servicios de salud, transparencia ciudadana, proporcionalidad y efectiva tutela del derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 43 de la Constitución española. La ley desarrolla de manera pormenorizada el procedimiento de actuación en el ejercicio de la función de autoridad para la investigación de conductas de corrupción sanitaria para así garantizar, el derecho de defensa, el principio de contradicción e igualdad de armas procesales, presunción de inocencia y celeridad en la tramitación.

Como novedad capital esta ley establece un mecanismo de protección y tutela de derecho de los ciudadanos que comunican a la Agencia un hecho que pueda ser subsumible como acto de corrupción sanitaria. Este derecho de amparo se extenderá a los profesionales que presten servicios en las Administraciones públicas sanitarias.

IV

Esta ley se dicta en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación de la sanidad y sobre las bases del régimen de las Administraciones públicas.

CAPÍTULO I

La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

1. El objeto de la presente Ley es la creación de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, la regulación de su naturaleza y régimen jurídico, así como su funcionamiento y los procedimientos a seguir en el ejercicio de sus funciones.

2. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad la instauración de un modelo de integridad institucional en la sanidad pública para prevenir la corrupción que deberá coordinar y

supervisar con carácter externo al Sistema Nacional de Salud la implantación y seguimiento de las siguientes medidas en todo el territorio español:

- a) Identificación de las áreas de riesgo.
- b) Diseño de políticas de integridad.
- c) Elaboración de códigos de buenas prácticas.
- d) Evaluación las medidas administrativas e instrumentos jurídicos adoptados para determinar su eficacia.
- e) Difusión e información sobre integridad pública.
- f) Desarrollo de un modelo de “public compliance” en todo el Sistema Nacional de Salud
- g) Investigación de conductas susceptibles de ser constitutivas de corrupción y su posterior denuncia ante los organismos pertinentes.

Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico

1. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, vinculada a la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y con independencia funcional y orgánica respecto de las Administraciones públicas.

2. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés particular, empresarial o comercial.

3. En su denominación constará la indicación « alta autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.A.I.».

4. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarrollo. En lo no previsto por estas, como legislación supletoria, se aplicará la legislación básica del Estado sobre procedimiento administrativo común, procedimiento administrativo sancionador, Estatuto Básico del empleado Público, Estatuto de los Trabajadores y Ley de contratos del sector público.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de actuación

El ámbito de actuación de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud se extiende a:

1. El sector público sanitario que, a los efectos de esta Ley, está integrado por:

a) El Ministerio de Sanidad, las Consejerías competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas, sus agencias, organismos autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, siempre que se dediquen a actuaciones de carácter prestacional y sanitario y sea cual sea su denominación.

b) Todos los hospitales y centros de salud integrados en la red sanitaria pública.

c) Las corporaciones de derecho público que se dediquen a actuaciones sanitarias, en cuanto a sus actividades sujetas al derecho administrativo.¹

2. Los siguientes cargos públicos y privados así como personal estatutario y no estatutario:

a) Los altos cargos y personal del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas.

b) Las personas físicas que ostenten la titularidad de los órganos directivos de las entidades mencionadas las letras a), b) y c) del apartado anterior.

3. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean contratistas de la Administración, concesionarias, perceptoras de subvenciones públicas o que en virtud de convenio o concierto sean prestadoras o gestoras de servicios sanitarios públicos.

4. Las personas físicas que formen parte de los órganos de dirección, gestión, representación o asesoramiento de las personas jurídicas mencionadas en el apartado anterior.

5. Los empleados públicos del Ministerio de Sanidad, de las Consejerías competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas; el personal de las agencias, organismos autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas cualquiera que sea su denominación y régimen jurídico y el personal sanitario cualquiera que sea su régimen jurídico o su vinculación.

6. Sin perjuicio de las previas previsiones, con carácter general todo acto vinculado con las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud

¹ Los colegios profesionales como corporaciones de derecho público deben estar sometidos plenamente en todas sus actuaciones (administrativas y privadas) dado que la colegiación es condición previa al ejercicio de una profesión sanitaria.

quedarán bajo el ámbito de actuación de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO II

De las funciones de alta autoridad tutelar de las prestaciones de los ciudadanos sanitarios

Artículo 5. Funciones en materia de prevención de la corrupción sanitaria.

1. Se considera a los efectos de la presente ley como acto de corrupción sanitaria cualquier decisión expresa, actuación material o cualquier otra decisión directiva, gestora o profesional que menoscabe de manera grave las prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos, y que afecte de manera individual o colectiva el derecho a la protección de la salud.

2. Son funciones de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud destinadas a la prevención de la corrupción:

2.1. La realización de estudios y análisis sobre:

- a) Sobornos o cualquier otra contraprestación en la prestación de los servicios médicos.
- b) Corrupción en los procesos de compra y otras contrataciones.
- c) Relaciones de marketing inadecuadas.
- d) Abuso de poder en niveles de responsabilidad altos.
- e) Reclamaciones de reembolsos indebidos.
- f) Fraude y malversación en medicinas y tecnología médica.
- g) Existencia de conflictos de interés en el ámbito directivo, de la actuación profesional de los sanitarios y de los responsables de las diferentes administraciones sanitarias.
- h) Nepotismo en la función directiva y de gobierno en los centros, servicios, unidades e instituciones sanitarias.
- i) Mal uso de posición de superioridad que coarte, limite, condicione o menoscabe el libre ejercicio de la autonomía científico-técnica de los profesionales sanitarios.
- j) Alteración de la integridad de las listas de espera o informes y documentos oficiales.

2.2 El diseño de políticas de integridad en cada una de las áreas mencionadas.

2.3 La evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y medidas existentes en materia de prevención de la corrupción.

2.4. El fomento de valores y principios de ética pública e integridad, incluyendo la implantación de códigos de buenas prácticas y velar por su cumplimiento como principios de actuación del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6. Funciones en materia de investigación de conductas de corrupción sanitaria.

1. Son funciones de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud destinadas a la investigación de conductas susceptibles de ser constitutivas de corrupción sanitaria:

a) La investigación de conductas de los cargos públicos y del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud que puedan ser constitutivas de conflictos de interés, uso o abuso de información por razón del cargo, o que puedan tener como resultado el uso o destino irregular de fondos públicos.

b) La investigación de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados de la investigación, instar la incoación de los procedimientos correspondientes para depurar las responsabilidades que pudieran existir.

c) La comprobación e investigación sobre la justificación de las variaciones en forma de incrementos del patrimonio de los cargos públicos y del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud.

d) La comprobación del cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud.

2. Para el ejercicio de las funciones reguladas en este precepto, la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud podrá acceder sin limitación alguna, aunque con el cumplimiento del deber de sigilo o de secreto cuando así proceda, a toda la información que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley. Asimismo, podrá personarse en las dependencias administrativas o en las que se preste un servicio público sanitario para solicitar información y realizar comprobaciones.

3. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones. En caso de que la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal inicien un

procedimiento para determinar la relevancia penal de hechos que sean objeto de actuaciones de investigación de la Agencia, este, inmediatamente, deberá interrumpir sus actuaciones y aportar toda la información de la que dispone, además de proporcionar apoyo y colaboración si fuese requerido para ello.

4. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud articulará los canales necesarios para la interposición de denuncias por parte de los denunciantes a los que se les garantizará discreción y protección. En todo caso el denunciante de una conducta corrupta sanitaria gozará de la máxima, plena y total protección por parte de la Agencia, y cualquier represalia generará la depuración de la pertinente responsabilidad disciplinaria.

Artículo 7. Funciones de difusión de información y formación en materia de integridad.

1. En el ejercicio de sus funciones la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud podrá colaborar con otras instituciones o entidades nacionales, internacionales o extranjeras tanto para informarse como para dar a conocer actuaciones en materia de prevención así como la evaluación de las mismas.

2. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud colaborará con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética pública mediante la elaboración de guías formativas y de asesoramiento especializado en materia de prevención y detección de la corrupción.

3. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud contribuirá a la creación de una cultura social de rechazo de la corrupción, en coordinación con las Administraciones públicas y otras organizaciones públicas o privadas, mediante la elaboración de programas específicos de sensibilización de la ciudadanía.

4. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud colaborará con cualquier persona, colectivo o entidad que quiera hacer sugerencias, propuestas o solicitar su actuación en materia de prevención, detección y control de la corrupción.

CAPÍTULO III

Procedimiento en la función de investigación de conductas de corrupción sanitaria.

Artículo 8. Inicio del procedimiento.

1. La incoación será de oficio cuando se tenga conocimiento fundado de hechos que requieran ser investigados, inspeccionados o cuando un análisis preventivo de riesgo así lo aconseje.
2. La incoación será a instancia de parte mediante comunicación de cualquier persona relativa a la comisión de presuntas irregularidades. En todo caso, se dejará constancia escrita de la comunicación, comprensiva de la fecha y hora de su recepción y de las actuaciones presuntamente irregulares. Se deberá garantizar la confidencialidad sobre la identidad de la persona comunicante que solo podrá ser revelada por requerimiento de la autoridad judicial.

Artículo 9. Tramitación.

En la ordenación e instrucción del procedimiento se aplicará lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, con las especialidades del procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 10. Terminación.

1. La conclusión de la investigación o inspección deberá producirse en el plazo de nueve meses desde la incoación del expediente.
2. Finalizada la investigación o inspección se emitirá un informe comprensivo de las conclusiones que se hayan alcanzado y, en su caso, de las recomendaciones que estime pertinentes tanto de carácter preventivo como correctivo a que pueda haber lugar, así como de los resultados de los análisis de riesgo efectuados.
3. El informe previsto en el apartado anterior se remitirá al órgano o entidad investigada, cuyo máximo responsable informará en el plazo de 1 mes a la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud acerca de las medidas adoptadas o de los motivos que impidan su implantación.
4. Si durante la tramitación del expediente se apreciaren indicios de la comisión de infracciones penales se dará traslado inmediato al Ministerio Fiscal.

Artículo 11. *Garantías del procedimiento.*

En el desarrollo del procedimiento de investigación de conductas se garantizarán a todas las personas afectadas por la investigación los siguientes derechos:

1. El derecho a la presunción de inocencia.
2. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
3. El derecho de defensa.
4. El derecho a conocer el expediente, ser oídos y formular alegaciones.
5. El derecho a la protección de datos de carácter personal.

Artículo 12. *Deber de colaboración.*

1.-Todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen el deber de colaborar con la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.

2. El incumplimiento del deber de colaboración constituye una falta grave.
3. El incumplimiento del deber de colaboración podrá dar lugar a la incoación de expediente disciplinario tanto para los empleados públicos como para los altos cargos y también para particulares, de acuerdo con la normativa aplicable a cada uno de ellos.
4. En los informes anuales y en un apartado específico de la web de la Agencia se indicará la relación de instituciones y organismos públicos y privados y de sus responsables que no han cumplido con la obligación legal de colaboración.

CAPÍTULO IV

Régimen sancionador en materia de conductas de corrupción sanitaria.

Artículo 13. *Concepto y clases de infracciones*

1. Son infracciones sancionables las acciones u omisiones dolosas o culposas que estén tipificadas como tales en esta Ley y en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves.

3.- A efectos de lo que establece esta Ley, se entenderá que hay ocultación de datos a la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud cuando no se faciliten los documentos o informaciones que solicite o cuando los que se entreguen que incurran en falsedad o en omisión total o parcial de datos.

4.- A efectos de lo que establece esta Ley, se consideran medios fraudulentos los documentos o soportes falsos o falseados.

Artículo 14. *Infracciones muy graves*

1.- Se consideran infracciones muy graves:

a) El hecho de impedir o dificultar el ejercicio de las funciones de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud cuando se aprecie mala fe o intencionalidad.

b) La no entrega de la información clave que requiera la Agencia en los plazos indicados en la solicitud, cuando derive en un perjuicio muy grave o sea causa de paralización de la investigación o el expediente para los cuales se solicita.

c) La remisión de información clave incompleta o inexacta en los requerimientos de información cuando derive en un perjuicio grave o sea causa de paralización de la investigación o el expediente para los cuales se solicita.

d) La falsedad y la ocultación documental, y la manipulación de la información requerida.

e) Cualquier tipo de coacción al personal dependiente de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud o cualquier acción en contra de los principios de integridad e independencia del mismo.

f) La filtración de información en el curso de la investigación.

g) El hecho de aportar de manera dolosa documentación o información falsa o falseada con la denuncia.

h) El incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley cuando se aprecie mala fe o intencionalidad.

i) Las infracciones tipificadas en los artículos 27, 28 y 29.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2.- Cuando se haya sido sancionado mediante una resolución firme en vía administrativa por la comisión de una falta grave en el periodo de los tres

años anteriores, la comisión de una nueva falta grave tendrá la consideración de falta muy grave.

Artículo 15. *Infracciones graves*

1.- Se consideran infracciones graves:

a) El hecho de impedir o dificultar el ejercicio de las funciones de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.

b) La reiteración en dos infracciones leves con sanción firme en vía administrativa.

c) La inasistencia injustificada a la comparecencia requerida por parte de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.

d) La no entrega de la información relevante que requiera el Comisionado en los plazos indicados en la solicitud, cuando derive en un perjuicio grave para la investigación o el expediente para los cuales se solicita.

e) La remisión de información relevante incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Agencia, cuando derive en un perjuicio grave para la investigación o el expediente para los cuales se solicita.

f) El hecho de negar indebidamente la entrada o la permanencia del personal dependiente de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud que impida el ejercicio de las funciones y potestades en materia de investigación e inspección que recoge esta Ley.

g) El hecho de negar o dificultar el acceso a los documentos, a los expedientes, a los libros, a los registros, a la contabilidad y a las bases de datos contraviniendo las potestades de la Agencia.

h) El hecho de no responder a los informes de conclusiones de las investigaciones, en las condiciones y los plazos que establece esta Ley.

i) El incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley cuando no tenga la consideración de muy grave.

j) Las tipificadas en el artículo 29.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno.

2.- Cuando se haya sido sancionado mediante una resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos faltas leves en el año anterior, la comisión de una nueva falta leve tendrá la consideración de falta grave.

Artículo 16. Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

- a) La no entrega de la información requerida en los plazos indicados en la solicitud, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita.
- b) La remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita.
- c) El hecho de no asegurar la indemnidad de los datos a requerimiento del personal que actúe bajo el mandato de la Agencia, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita.
- d) El incumplimiento culposo o negligente de otros deberes y obligaciones que establece esta Ley, siempre que no tenga que ser calificado como infracción grave o muy grave.
- e) Las tipificadas en el artículo 29.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 17. Sanciones

1.- A las infracciones que establece esta Ley se aplican las sanciones siguientes:

- a) Infracciones muy graves: multa de 10.001 € a 100.000 €. En caso de que la infracción suponga un grave perjuicio para una investigación, que pueda derivar en reclamaciones económicas relacionadas con fondos públicos, se aumentará la cuantía de la multa hasta un 20 por ciento de la cuantía económica defraudada según la cuantificación hecha por la Agencia.
- b) Infracciones graves: multa de 1.001 € a 10.000 €. En caso de que la infracción suponga un grave perjuicio para una investigación, que pueda derivar en posibles reclamaciones económicas relacionadas con fondos públicos, se aumentará la cuantía de la multa hasta un 5% de la cuantía económica defraudada según la cuantificación hecha por la Agencia.
- c) Infracciones leves:
 - 1º Amonestación.
 - 2º Multa de 1 € a 1.000 €.

2.- Las infracciones tipificadas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tendrán las sanciones establecidas en dicha Ley.

3.- Con independencia de las sanciones que se les impongan, los infractores tienen que restituir los daños producidos, si los hubiere. A tal efecto se ejercitará la preceptiva acción de regreso.

4.- Todas las declaraciones se sancionarán también con la declaración de incumplimiento de la ley y, en caso de infracción grave o muy grave, con la publicación de esta declaración de la infracción cometida y de la sanción impuesta en el Boletín Oficial del Estado.

5.- De manera complementaria a las sanciones graves y muy graves, la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud puede solicitar al órgano del cual dependa el cargo público que disponga su cese siempre que sea de libre designación, conforme a la legislación básica del Estado en materia de personal estatutario.

6.- En el caso de infracciones graves o muy graves cometidas por personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en el ámbito de esta Ley, la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud lo comunicará la resolución de la sanción a los órganos competentes de las entidades públicas afectadas a los efectos que prevea la legislación vigente en materia de contratación, ayudas y subvenciones públicas.

Artículo 18. Gradación de las sanciones

1.- Las sanciones que se impongan por la comisión de las infracciones tipificadas se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendidos especialmente los criterios siguientes:

a) La reincidencia, cuando no haya sido tomada en cuenta para tipificar la infracción.

b) La importancia del daño o el perjuicio causado a los intereses públicos.

c) El grado de perjuicio de la infracción en la actividad investigadora de la Agencia.

d) La reparación de daños o perjuicios producidos, si procede, y también la enmienda de la infracción por iniciativa propia.

e) Se tendrán en consideración los principios de proporcionalidad, intencionalidad y culpabilidad.

2.- Se entiende por reincidencia la comisión de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

3.- La aplicación de la sanción será proporcionada a la gravedad de la conducta infractora y asegurará que la comisión de infracciones no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

CAPÍTULO V

Procedimiento sancionador

Artículo 19. Incoación e instrucción del procedimiento

1.- El órgano competente para incoar y resolver el procedimiento sancionador es la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.

2.- La Agencia incoará los procedimientos de oficio. En el acuerdo de iniciación se nombrará a un funcionario público al servicio de la institución para que instruya el procedimiento. También se podrá nombrar a un secretario o una secretaria del procedimiento.

3.- Una vez finalizada la instrucción, la Comisión lo notificará previamente a la persona interesada, la cual dispondrá de un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones y aportar los documentos que considere pertinentes para defenderse.

4.- Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal mencionado en el apartado 2 de este precepto y la resolutoria, que corresponderá al pleno de la Agencia.

5.- El procedimiento sancionador se regirá por lo que dispone la legislación básica del Estado en esta materia.

6.- La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

Artículo 20.- Responsabilidades

1. La responsabilidad administrativa es exigible sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales u otras que puedan concurrir.

2. En el supuesto de que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, el órgano administrativo competente pasará el tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente y se abstendrá de continuar el procedimiento sancionador mientras no haya sentencia firme. Cuando el proceso penal acabe con sentencia absolutoria o sin declaración penal, provisionalmente o definitivamente, se podrá iniciar, continuar o retomar el procedimiento sancionador correspondiente para determinar las posibles infracciones administrativas.

3. No puede ser objeto del expediente sancionador que regula esta Ley en ningún caso el hecho sancionado en causa penal o cuando sea de aplicación preferente la legislación laboral, fiscal, o el régimen especial aplicable a los funcionarios públicos.

Artículo 21. Prescripción

1.- El plazo de prescripción de las infracciones que prevé esta Ley es de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

2.- La prescripción de las infracciones se interrumpe por el inicio, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador.

3.- Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescriben al cabo de cinco años; las impuestas por infracciones graves, al cabo de tres años; y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves, en el plazo de un año.

4.- La prescripción de las sanciones se interrumpe por el inicio, con la notificación a la persona interesada, del procedimiento de ejecución.

5.- Para el cómputo de los plazos de prescripción que regulan los dos apartados anteriores, y también para las causas de interrupción, se aplicará lo dispuesto en la legislación básica del Estado.

CAPÍTULO III

Organización y funcionamiento

Artículo 22. Órganos de gobierno

La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de gobierno:

- a) El consejo de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.
- b) La Presidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, que lo será también de su Consejo.
- c) La Vicepresidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, que lo será también de su Consejo.

Artículo 23. El Consejo

1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones atribuidas a la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.

En todo caso, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, el nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y disposiciones y, en su caso, la potestad de dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los sujetos vinculados por su ámbito de aplicación.

2. El Consejo de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud estará integrado por seis miembros.

3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo de la Agencia y cualquier integrante del personal no directivo que determine la Presidencia, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podrán asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones Públicas.

Artículo 24. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo

1. Los miembros del Consejo, y entre ellos la Presidencia y la Vicepresidencia, serán nombrados por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro competente en materia de Sanidad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Agencia, previa comparecencia de las personas propuestas para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, aceptará la propuesta. Si transcurridos quince días desde la comparecencia no hubiera aceptación, será suficiente la mayoría simple de la Comisión competente para manifestar la aceptación.

2. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección

Artículo 25. Funcionamiento del Consejo

1. El Consejo actúa en pleno. La asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la reunión.

2. A propuesta la Presidencia, el Consejo en pleno elegirá un Secretario no consejero, que deberá tener la titulación de Licenciatura o Grado en Derecho o titulación que lo sustituya y que será funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración General del Estado o de las Administraciones autonómicas, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en Derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del Consejo.

3. El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno se desarrollará en el Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno.

Artículo 26. El pleno del Consejo

1. El Consejo en pleno está integrado por todos los miembros del Consejo. Lo preside la Presidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el Vicepresidente o en su defecto, el consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.

2. El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia la Presidencia o persona que lo sustituya, el secretario, y dos miembros del Consejo. En caso de ausencia del secretario, este será sustituido por el miembro del servicio jurídico de la Agencia que determine la Presidencia, a los efectos de lograr una válida constitución del órgano colegiado.

Artículo 27. Funciones de la Presidencia

1. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud:

a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.

- b) Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.
 - c) Ostentar la representación legal e institucional de la Agencia.
 - d) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Agencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
 - e) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Agencia.
 - f) Impulsar la actuación de la Agencia y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas.
 - g) Ejercer funciones de jefatura del personal de la Agencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.
 - h) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Agencia, sin perjuicio de las funciones del Consejo; en particular coordinar, con la asistencia del Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de las unidades de la Agencia.
 - i) Dar cuenta al titular del Ministerio de adscripción de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Agencia.
 - j) Aprobar los actos de ejecución de los presupuestos de la Agencia.
 - k) Ejercer las competencias que le correspondan en la contratación de la Agencia.
 - l) Cuantas funciones le delegue el Consejo.
 - m) Efectuar la rendición de cuentas de la Agencia.
 - n) Comparecer ante el Parlamento en los términos previstos en esta Ley.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Vicepresidente o por quien determine el consejo.

Artículo 28. Funciones del Consejo de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud

El Consejo de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud es el órgano de decisión en relación con las funciones previstas en esta Ley y además:

1. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.

2. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias de la Presidencia, Vicepresidencia y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones.
3. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta de la Presidencia del Consejo.
4. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta de la Presidencia del Consejo.
5. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.
6. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.

Artículo 29. Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo

1. Los miembros del Consejo de Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud ejercerán su función con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado.
2. Los miembros del Consejo no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud que correspondan al personal directivo de la Agencia.
3. Los miembros del Consejo estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en sus disposiciones de desarrollo.
4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con la actividad de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.
5. Las agendas de los integrantes del Consejo serán públicas.
6. Las actas de las reuniones deberán publicarse en la web corporativa de la Agencia.

Artículo 30. Causas de cese en el ejercicio del cargo

1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo:

- a) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
 - b) Por expiración del término de su mandato.
 - c) Por incompatibilidad sobrevenida.
 - d) Por haber sido condenado.
 - e) Por incapacidad permanente.
 - f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio competente en materia de Sanidad.
2. Si durante el período de duración del mandato correspondiente a un determinado Consejero se produjera su cese, el sucesor será nombrado por el tiempo que restase al sustituido para la terminación de su mandato. Si el cese se hubiera producido una vez transcurridos cuatro años desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite anterior, y el sucesor será nombrado por el periodo de seis años previsto con carácter general.
3. Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el real decreto de cese correspondiente.

Artículo 31. Obligación de informar y garantías para la actuación imparcial

1. La Presidencia, Vicepresidencia, los consejeros, directivos y empleados, o sus representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades o actividades en las que la Agencia ejerce su supervisión, deberán notificar al Consejo cualquier derecho o facultad, cualquiera que sea su denominación, a reserva o recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial. En el caso de los miembros del Consejo dicha circunstancia deberá hacerse pública.
2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud garantizará que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben. Las agendas de actividad profesional vinculada con la actividad de la Agencia serán públicas.

3. La participación de todo el personal de la Agencia en cualquier evento, acto, actividad y análogas tendrá carácter institucional y no podrá ser retribuido.

Artículo 32. Régimen jurídico del personal

1. El personal que preste servicios en la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud será funcionario y laboral, en los términos establecidos en la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

2. El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.

La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.

3. El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la normativa convencional aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que expresamente le resulten de aplicación.

La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria pública, con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

4. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el pleno del consejo, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

5. Se determinarán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en la relación de puestos de trabajo los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, competencia técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y su cobertura se realizará mediante concurso de méritos.

6. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del Ministerio competente en materia de Hacienda Pública.

Asimismo, el Ministerio competente en materia de Hacienda Pública efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios que a tal efecto haya establecido.

Artículo 33. Régimen de contratación

Los contratos que celebre la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud se ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público, siendo su órgano de contratación la Presidencia de la misma hasta los 50.000 euros y el consejo a partir de los 50.000 euros.

Artículo 34. Régimen económico-financiero y patrimonial

1. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud tendrá presupuesto y patrimonio propio e independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.

2. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante la creación de una Sección propia.

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

3. El control económico y financiero de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Artículo 35. Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero

1. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio competente en materia de Hacienda Pública a través del Ministerio competente en materia de Sanidad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley general Presupuestaria.

2. Corresponde a la Presidencia de la Agencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de cuentas del organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

4. La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo. La Agencia dispondrá de un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.

5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Agencia bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 36. Asistencia jurídica

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, corresponderá a la Unidad Jurídica de Lucha Contra la Corrupción Sanitaria, que ejercerá también las funciones que se determinen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia, el cual regulará también su composición.

Artículo 37. Recursos contra los actos, las decisiones y las resoluciones de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud

1. Los actos y decisiones de los órganos de la Agencia distintos de la Presidencia y del Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo

conforme a lo dispuesto en la Ley 90/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Los actos y resoluciones de la Presidencia y del Consejo, en pleno y en salas, de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud dictados en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 38. Control parlamentario

1. La Presidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Junto con la Presidencia, podrán comparecer, a petición de la Cámara, uno o varios miembros del Consejo.

2. Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el plan de actuación.

3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, la Presidencia comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.

4. Cada tres años la Presidencia comparecerá de forma especial para debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido por la Agencia.

Disposición Adicional Única. De la designación de los miembros del consejo

En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá al nombramiento de los miembros del Consejo y las designaciones de la Presidencia y Vicepresidencia de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud, por el procedimiento y con los requisitos establecidos en la presente Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación general

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley tiene carácter de legislación básica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1 apartados 16º y 18º de la Constitución Española.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo de la ley.

El Consejo de Ministro aprobará en el plazo de seis meses un Real Decreto que regule el estatuto jurídico de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud.

La institución de la Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud aprobará su Reglamento de Organización y Funcionamiento en el plazo máximo de seis meses a contar desde el nombramiento de los miembros de la Agencia.

Disposición final tercera. Entrada en vigor de la ley.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.